

Test fácil Bloque 2

1. En el estudio de las fuentes del Derecho, ¿qué se entiende específicamente por su acepción formal?
 - a) Las formas o modos en que se manifiestan las normas jurídicas.
 - b) Las fuerzas sociales que tienen potestad para crear normas en la sociedad.
 - c) El conjunto de materiales que permiten conocer el Derecho administrativo histórico.
 - d) El procedimiento interno de elaboración de los anteproyectos de ley por el Gobierno.

2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.1 del Código Civil, ¿cuáles son las fuentes del ordenamiento jurídico español?
 - a) La Constitución Española, las Leyes Orgánicas y los reglamentos administrativos.
 - b) La Ley, la costumbre y los principios generales del derecho.
 - c) La Ley, la jurisprudencia del Tribunal Supremo y los tratados internacionales.
 - d) La Constitución, las Leyes del Estado y las Leyes de las Comunidades Autónomas.

3. Según establece el artículo 1.2 del Código Civil sobre el principio de jerarquía normativa, ¿qué sanción jurídica reciben las disposiciones que contradigan otra de rango superior?
 - a) Serán anulables siempre que causen una indefensión real al administrado interesado.
 - b) Serán consideradas reglamentos ejecutivos de carácter supletorio hasta su revisión.
 - c) Carecerán de validez.
 - d) Serán objeto de un recurso de alzada obligatorio ante el superior jerárquico del órgano emisor.

4. Conforme al artículo 1.3 del Código Civil, para que la costumbre pueda regir en defecto de ley aplicable, es requisito indispensable que:
 - a) No sea contraria a la moral o al orden público, y que resulte probada.
 - b) Se encuentre inscrita previamente en el registro de usos y costumbres de la localidad.
 - c) Haya sido aprobada expresamente por el Ministerio de Justicia mediante orden.
 - d) Se aplique exclusivamente en el ámbito de las relaciones de Derecho Privado.

5. De acuerdo con el artículo 1 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, ¿cuál es el objeto de esta norma?

- a) Regular únicamente la organización interna de la Administración General del Estado.
- b) Establecer el procedimiento administrativo común aplicable a todos los ciudadanos.
- c) Definir las competencias exclusivas del Tribunal de Cuentas en materia presupuestaria.
- d) Sentar las bases del régimen jurídico de las AAPP y los principios de la potestad sancionadora.

6. Según el artículo 2.1 de la Ley 40/2015, ¿cuál de los siguientes sujetos integra la definición legal de Sector Público?

- a) La Administración General del Estado.
- b) Las Administraciones de las Comunidades Autónomas.
- c) Las Entidades que integran la Administración Local.
- d) Todas las anteriores son correctas.

7. Conforme a lo previsto en la Ley 40/2015, ¿cuál es el número mínimo de personas necesario para integrar un órgano colegiado?

- a) Dos personas, siempre que una actúe como presidente y otra como secretario técnico.
- b) Tres o más personas.
- c) Cinco personas para asegurar la pluralidad en las votaciones de asuntos urgentes.
- d) Siete personas, salvo en el caso de las comisiones de selección de personal.

8. De acuerdo con el artículo 38.1 de la Ley 40/2015, ¿cómo se define legalmente la Sede Electrónica?

- a) Una página web de acceso libre gestionada por cualquier entidad colaboradora del sector público.
- b) El portal informativo de la Administración que carece de efectos jurídicos vinculantes.
- c) Dirección electrónica cuya titularidad, gestión y responsabilidad corresponde a una Administración Pública.
- d) El servidor físico donde se alojan exclusivamente los archivos digitales de una universidad.

9. Según establece el artículo 39 de la Ley 40/2015, ¿cuál es la función principal de un Portal de Internet?

- a) Ser el entorno virtual seguro para realizar el pago de tasas y multas administrativas.
- b) Punto de acceso electrónico que permite el acceso a la información publicada.
- c) El registro oficial de entrada y salida de todos los documentos electrónicos presentados.
- d) El sistema de custodia de las claves de firma electrónica cualificada de los funcionarios.

10. En relación con la seguridad jurídica, la identificación de las Sedes Electrónicas se realizará obligatoriamente mediante:

- a) Sistemas de sello electrónico basados en certificados cualificados de representante.
- b) Certificados de autenticación de sitio web o medio equivalente.
- c) El uso de un Código Seguro de Verificación (CSV) por cada página del portal.
- d) La firma electrónica manuscrita digitalizada del titular de la sede administrativa.

11. ¿Qué sistema de firma electrónica se utiliza para la actuación administrativa automatizada, de acuerdo con el artículo 42 de la Ley 40/2015?

- a) Sello electrónico de Administración Pública, órgano, organismo público o entidad de derecho público.
- b) Firma electrónica cualificada del funcionario que haya programado el sistema informático.
- c) Sistema de firma basado en el Documento Nacional de Identidad del usuario externo.
- d) No se requiere firma en estas actuaciones al ser producidas de forma íntegramente mecánica.

12. A efectos de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común, ¿quiénes tienen capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas?

- a) Solo los ciudadanos españoles mayores de edad que no hayan sido incapacitados.
- b) Las personas físicas o jurídicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las normas civiles.
- c) Exclusivamente las personas físicas que dispongan de un certificado digital activo y válido.
- d) Únicamente los empleados públicos en el ejercicio de sus funciones representativas.

13. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.1.a) de la Ley 39/2015, ¿quiénes tienen la consideración de interesados por ser promotores del procedimiento?

- a) Quienes lo inicien como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos.
- b) Únicamente las personas físicas que tengan un interés económico directo y cuantificable.
- c) Cualquier ciudadano que presente una denuncia sobre hechos constitutivos de infracción administrativa.
- d) Las asociaciones vecinales, siempre que cuenten con una antigüedad superior a los cinco años.

14. Según establece el artículo 5.1 de la Ley 39/2015, ¿qué se requiere para que las actuaciones de un representante vinculen al interesado?

- a) Que el representante disponga obligatoriamente de una autorización notarial para cada trámite.
- b) Que no conste manifestación expresa en contra del interesado con capacidad de obrar.
- c) Que el interesado sea menor de catorce años o se encuentre en situación de incapacidad legal.
- d) Que la Administración autorice la representación tras analizar la complejidad del expediente.

15. Conforme al artículo 5.3 de la Ley 39/2015, ¿para cuál de las siguientes actuaciones es obligatorio acreditar la representación por cualquier medio válido?

- a) Realizar consultas informativas sobre el estado de tramitación a través de la sede electrónica.
- b) La realización de actos y gestiones de mero trámite que no tengan carácter dispositivo.
- c) Para formular solicitudes, desistir de acciones, renunciar a derechos e interponer recursos.
- d) Comparecer físicamente en las oficinas de asistencia para solicitar modelos de solicitud.

16. En el supuesto de que en una solicitud figuren varios interesados, de acuerdo con el artículo 7 de la Ley 39/2015, ¿con quién se efectuarán las actuaciones?

- a) Con todos los firmantes de forma simultánea para garantizar el principio de publicidad.
- b) Con el interesado que haya aportado la firma electrónica cualificada de mayor nivel de seguridad.
- c) Con el representante o interesado que hayan señalado y, en su defecto, con el que figure en primer término.
- d) Con el interesado que ostente la mayor antigüedad de residencia en el municipio de la sede.

17. ¿Qué derecho lingüístico asiste a los interesados en sus relaciones con las Administraciones Públicas según el artículo 13.c) de la Ley 39/2015?

- a) A utilizar exclusivamente el castellano en todo el territorio nacional por ser la lengua oficial del Estado.
- b) A utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad Autónoma, de acuerdo con la ley.
- c) A exigir la traducción de todos los documentos al inglés si el interesado es ciudadano de la Unión Europea.
- d) A emplear cualquier lengua regional, siempre que aporte una traducción jurada realizada por un perito.

18. De conformidad con el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, ¿qué sujetos están obligados a relacionarse electrónicamente con las AAPP para cualquier trámite?

- a) Exclusivamente las personas físicas con capacidad económica o técnica superior a la media.
- b) Únicamente los empleados públicos cuando actúen fuera de su jornada laboral habitual.
- c) Las personas jurídicas y las entidades sin personalidad jurídica, entre otros colectivos profesionales.
- d) Todos los ciudadanos mayores de edad, independientemente de su formación o medios disponibles.

19. Según el artículo 53.1.d) de la Ley 39/2015, ¿cuál es el derecho de los interesados respecto a la aportación de documentos al expediente?

- a) A no presentar documentos que no tengan una relación directa con el objeto de la resolución.
- b) A no aportar datos y documentos que ya se encuentren en poder de las AAPP o hayan sido elaborados por estas.
- c) A presentar únicamente copias simples, quedando prohibida la exigencia de originales en todo caso.
- d) A presentar únicamente su documento nacional de identidad si el procedimiento es de naturaleza sancionadora.

20. Conforme al artículo 47.1.a) de la Ley 39/2015, ¿qué vicio de legalidad provoca la nulidad de pleno derecho de un acto administrativo?

- a) Cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluyendo los defectos de forma no esenciales.
- b) La lesión de los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.
- c) El haber sido dictado por un órgano con incompetencia jerárquica que sea susceptible de convalidación.
- d) La omisión de informes facultativos que hayan sido solicitados fuera del plazo legal establecido.

21. Según establece la Ley 39/2015, ¿qué calificación jurídica recibe aquel acto administrativo que tenga un contenido imposible?

- a) Es un acto anulable que puede ser subsanado por el superior jerárquico en el plazo de diez días.
- b) Se considera una irregularidad no invalidante que permite el mantenimiento de la eficacia del acto.
- c) Es nulo de pleno derecho.
- d) Requiere ser sometido a un trámite obligatorio de audiencia pública antes de ser declarado inválido.

22. De acuerdo con el artículo 53.1 de la Ley 39/2015, ¿qué derecho de acceso y obtención de copias asiste a los interesados en un procedimiento?

- a) Solo a obtener copias de la resolución definitiva tras el abono de las tasas administrativas vigentes.
- b) A acceder y a obtener copia de los documentos contenidos en los procedimientos donde tengan tal condición.
- c) Únicamente a consultar el expediente de forma presencial y bajo la supervisión de un funcionario.
- d) A acceder a las bases de datos internas de la Administración General del Estado para fines científicos.

23. En los procedimientos sancionadores, según el artículo 53.2.b) de la Ley 39/2015, los presuntos responsables tienen derecho a la presunción de:

- a) Culpabilidad administrativa, debiendo el interesado probar su inocencia en la fase de alegaciones.
- b) Responsabilidad solidaria de todos los implicados hasta que se dicte la propuesta de resolución.
- c) No existencia de responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo contrario.
- d) Veracidad de los hechos imputados por la autoridad, salvo que se aporte prueba en contrario.

24. ¿Cuál es la regla general sobre el carácter de los informes en el procedimiento administrativo común, salvo que una ley disponga otra cosa?

- a) Serán siempre preceptivos y tendrán carácter vinculante para el órgano encargado de resolver.
- b) Serán facultativos y no vinculantes.
- c) Serán facultativos pero de obligado cumplimiento si se solicitan a una Administración distinta.
- d) Serán preceptivos pero el órgano administrativo podrá apartarse de ellos sin necesidad de motivación.

25. En el procedimiento administrativo común, ¿cuál es el plazo supletorio para la emisión de informes si la norma especial no establece uno distinto?

- a) Cinco días naturales.
- b) Diez días hábiles.
- c) Quince días hábiles.
- d) Un mes natural.

26. Conforme al artículo 30.2 de la Ley 39/2015, ¿cómo se realiza el cómputo de plazos por días cuando se señalan como hábiles?

- a) Se incluyen todos los días del año excepto los festivos nacionales.
- b) Se excluyen exclusivamente los domingos y los días declarados festivos.
- c) Se excluyen los sábados, los domingos y los declarados festivos.
- d) Se incluyen los sábados si la oficina de registro abre por la mañana.

27. Si una solicitud de iniciación no reúne los requisitos necesarios, ¿de qué plazo de subsanación dispone el interesado según el artículo 68.1 de la Ley 39/2015?

- a) Cinco días hábiles ampliables a diez.
- b) Diez días hábiles.
- c) Diez días naturales.
- d) Quince días hábiles improrrogables.

28. ¿Cómo define legalmente el artículo 69.1 de la Ley 39/2015 el concepto de declaración responsable?

- a) Documento donde el interesado comunica sus datos identificativos para iniciar una actividad.
- b) Escrito por el que el interesado solicita a la Administración el reconocimiento de un derecho.
- c) Documento suscrito por un interesado en el que manifiesta que cumple con los requisitos establecidos.
- d) Certificación emitida por un funcionario público que acredita la veracidad de unos hechos.

29. Según lo dispuesto en el artículo 70.1 de la Ley 39/2015, ¿qué constituye el expediente administrativo?

- a) El conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución.
- b) Únicamente la resolución definitiva y las actas de notificación al interesado.
- c) El archivo físico donde se custodian las sentencias judiciales firmes.
- d) Las notas, borradores y juicios de valor emitidos por las unidades de apoyo.

30. De acuerdo con el artículo 3.1 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, ¿cuál de los siguientes sujetos forma parte del sector público?

- a) Las sociedades mercantiles con participación pública inferior al 25%.
- b) Las fundaciones privadas que no reciban ninguna subvención pública.
- c) Los consorcios dotados de personalidad jurídica propia y los fondos sin personalidad jurídica.
- d) Exclusivamente las Administraciones territoriales (Estado, CCAA y Ayuntamientos).

31. Para que una sociedad mercantil se considere integrante del sector público conforme a la Ley 9/2017, ¿qué requisito de participación debe cumplirse?

- a) Que la participación pública, directa o indirecta, sea superior al 50 por 100 de su capital social.
- b) Que cuente con al menos un representante del Estado en su consejo de administración.
- c) Que el 100 por 100 del capital social sea de titularidad pública directa.
- d) Que haya sido declarada de interés general por el Consejo de Ministros.

32. Señale cuál de estas entidades tiene la consideración específica de Administración Pública a efectos de la Ley 9/2017 de Contratos:

- a) Las sociedades mercantiles públicas que operan en régimen de libre mercado.
- b) Las Administraciones de las Comunidades Autónomas y las de las Ciudades de Ceuta y Melilla.
- c) Los partidos políticos y las organizaciones sindicales financiadas por el Estado.
- d) Las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social en su gestión privada.

33. ¿Qué finalidad tiene la publicación de información en el perfil de contratante de los órganos de contratación según la Ley 9/2017?

- a) Sustituir legalmente la publicación obligatoria de anuncios en el Boletín Oficial del Estado.
- b) Asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a la actividad contractual.
- c) Permitir que los empleados públicos puedan consultar sus nóminas y vacaciones.
- d) Servir de archivo histórico para contratos que ya han sido extinguidos hace más de diez años.

34. En relación con los contratos menores, ¿cuál es el umbral económico máximo para los contratos de servicios y suministros?

- a) 40.000 euros.
- b) 15.000 euros.
- c) 18.000 euros.
- d) 3.000 euros.

35. ¿Quién ostenta la competencia para actuar como órgano de contratación en las entidades del sector público?

- a) Las unidades de gestión económica y financiera de cada ministerio.
- b) La representación legal de las personas físicas interesadas en el procedimiento.
- c) Las personas físicas o jurídicas que tengan atribuida la facultad de celebrar contratos en su nombre.
- d) El Tribunal de Cuentas en su función de fiscalización de los gastos públicos.

36. De acuerdo con el artículo 107.1 de la Ley 9/2017, ¿cuál es el porcentaje general de la garantía definitiva que debe constituir el adjudicatario?

- a) El 3 por ciento del presupuesto base de licitación, IVA incluido.
- b) El 5 por ciento del precio final de adjudicación, excluido el IVA.
- c) El 10 por ciento del valor estimado del contrato prórrogas incluidas.
- d) El 2 por ciento del importe de la oferta más baja presentada en el proceso.

HOJA DE SOLUCIONES Y JUSTIFICACIONES

1	A	La acepción formal identifica las fuentes con los modos de expresión (Ley, costumbre, etc.), mientras que la material se refiere a la fuerza social creadora. Art. 1 CC.
2	B	El artículo 1.1 del Código Civil establece taxativamente que las fuentes son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho.
3	C	El artículo 1.2 del Código Civil consagra la nulidad (carencia de validez) de las normas que infrinjan la jerarquía normativa.
4	A	El artículo 1.3 exige que la costumbre no atente contra la moral o el orden público y que su existencia sea efectivamente probada en el proceso.
5	D	La Ley 40/2015 tiene carácter básico para todas las Administraciones Públicas, regulando sus bases jurídicas, responsabilidad y potestad sancionadora. Art. 1.
6	D	El artículo 2.1 incluye en el sector público tanto a la Administración del Estado como a las autonómicas y locales. Todas las opciones son integrantes legales.
7	B	Según el artículo 15.2 de la Ley 40/2015, los órganos colegiados deben estar formados por un mínimo de tres personas para su válida constitución.
8	C	El artículo 38.1 define la sede como la dirección electrónica bajo la plena responsabilidad y titularidad de una Administración actuante.
9	B	El artículo 39 distingue el portal como un punto de acceso a la información, diferenciándolo del ámbito de gestión de la sede electrónica.
10	B	La normativa exige certificados de autenticación de sitio web para garantizar que el ciudadano se relaciona con la administración auténtica. Art. 38.2 Ley 40/2015.
11	A	El artículo 42 de la Ley 40/2015 establece el sello electrónico como medio de identificación y firma para la actividad automatizada.
12	B	El artículo 3.a) de la Ley 39/2015 reconoce capacidad de obrar ante la Administración a quienes la tengan conforme a las normas civiles generales.

13	A	El artículo 4.1.a) de la Ley 39/2015 define como interesado a quien promueve el procedimiento como titular de derechos o intereses legítimos.
14	B	El artículo 5.1 de la Ley 39/2015 presume la validez de la representación salvo que el interesado manifieste expresamente lo contrario.
15	C	El artículo 5.3 de la Ley 39/2015 exige la acreditación fidedigna de la representación para actos de inicio o disposición de derechos.
16	C	El artículo 7 de la Ley 39/2015 establece que, ante una pluralidad de interesados, se actuará con el designado o con el primero de la lista.
17	B	El artículo 13.c) de la Ley 39/2015 reconoce el derecho de los ciudadanos al uso de las lenguas cooficiales en sus territorios.
18	C	El artículo 14.2 de la Ley 39/2015 impone la relación electrónica obligatoria a las personas jurídicas y otros colectivos específicos.
19	B	El artículo 53.1.d) de la Ley 39/2015 protege al interesado de la carga de entregar documentos que la Administración ya posee o puede consultar.
20	B	El artículo 47.1.a) de la Ley 39/2015 sanciona con la nulidad absoluta los actos que vulneren derechos fundamentales protegidos por amparo.
21	C	El artículo 47.1.c) de la Ley 39/2015 determina taxativamente la nulidad de pleno derecho para los actos cuyo contenido sea imposible.
22	B	El artículo 53.1.a) de la Ley 39/2015 garantiza a los interesados el acceso integral y la obtención de copias de los documentos de su expediente.
23	C	El artículo 53.2.b) de la Ley 39/2015 consagra el derecho fundamental a la presunción de inocencia en el ámbito administrativo.
24	B	Según el artículo 80.1 de la Ley 39/2015, los informes administrativos tienen carácter facultativo y no vinculante por defecto.
25	B	El artículo 80.2 de la Ley 39/2015 establece que los informes serán emitidos en el plazo de diez días, salvo que una disposición permita otro plazo.

26	C	El artículo 30.2 determina que los plazos por días hábiles excluyen sábados, domingos y festivos, salvo norma en contrario.
27	B	El artículo 68.1 de la Ley 39/2015 otorga un plazo de diez días para que el interesado subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos.
28	C	El artículo 69.1 define la declaración responsable como el documento donde el interesado manifiesta que cumple con los requisitos legales vigentes.
29	A	El artículo 70.1 define el expediente como el conjunto ordenado de documentos y actuaciones que fundamentan la resolución administrativa.
30	C	El artículo 3.1 de la Ley 9/2017 incluye expresamente a los consorcios con personalidad jurídica y a los fondos sin personalidad jurídica en el sector público.
31	A	El artículo 3.1.h) establece que la participación pública debe ser superior al 50 por ciento para integrar la sociedad en el sector público.
32	B	El artículo 3.2.a) de la Ley 9/2017 otorga la condición de Administración Pública, entre otras, a las Administraciones de las CCAA y Ciudades Autónomas.
33	B	El perfil de contratante tiene como objetivo difundir la información de la actividad contractual del órgano para garantizar la transparencia. Art. 63.
34	B	Según el artículo 118 de la Ley 9/2017, el límite para los contratos menores de servicios y suministros es de 15.000 euros de valor estimado.
35	C	El órgano de contratación es la persona física o jurídica que, conforme a la normativa, tiene la facultad de celebrar contratos. Art. 61.
36	B	El artículo 107.1 de la Ley 9/2017 establece que el adjudicatario debe constituir una garantía del 5 por ciento del precio de adjudicación, excluido el IVA.